



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO PROYECTO DE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL CARGO DE DIPUTACIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE), presento **VOTO CONCURRENTE**, respecto del punto 2.2 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, consistente en el proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y proyecto de Resolución del Consejo General del INE respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes al cargo de Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. En este sentido, si bien comparto el proyecto en lo general, me permito manifestar las razones por las que no comparto diversas consideraciones:

Motivos de disenso.

1) Omisión de autoridades y proveedores en dar respuestas a los requerimientos formulados por la UTF.

Resulta pertinente señalar que el artículo 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo siguiente:

Artículo 200.

1. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

2. De igual forma la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos señalados en el párrafo inmediato anterior.

Como puede advertirse del artículo en cita, tanto las autoridades, las instituciones públicas y privadas, así como los particulares, personas físicas o morales, se encuentran obligadas por mandato de ley, a proporcionar y/o atender los requerimientos que la autoridad fiscalizadora les formule, ello en un plazo no mayor a 5 días una vez realizada la consulta, situación que no está sujeta a cuestionamiento o duda alguna.

Ahora bien, es preciso señalar que durante el periodo de revisión de los informes de ingresos y egresos presentados por los sujetos obligados, relativos al periodo de precampañas en el PEL 2020-2021, de la Ciudad de México, se formularon sendos requerimientos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al proveedor de servicios digitales Facebook, quienes si bien desahogaron algunos de los requerimientos que les fueron formulados, lo cierto es que se tiene registro de otros tantos respecto de los cuales no se ha dado respuesta alguna, como acontece en el presente ejercicio.

En este sentido, estoy convencido que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a ningún tipo de discrecionalidad, como ocurre en el presente caso, razón por la cual considero que, ante tales omisiones, se debieron ordenar sendas vistas tanto a los superiores jerárquicos de las autoridades involucradas, como a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que procedieran conforme a derecho.

2) Indebida construcción de la matriz de precios.

El motivo de mi disenso, como ya me he posicionado en múltiples ocasiones anteriores, es que la metodología bajo la cual fue construida la matriz de precios de la presente revisión, parte de una evidente depuración excesiva, sobre lo cual, considero que si bien, como cualquier base de datos, debe llevar un proceso de detección y corrección de datos incorrectos, inexactos, incompletos o aquellas subvaluaciones y sobrevaluaciones, para luego modificarlos, sustituirlos o eliminarlos, cualquier otro tipo de depuración de información no tiene razón ni fundamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) debe elaborar una matriz de precios, para la determinación del valor de los gastos no reportados, subvaluaciones y sobrevaluados, con información homogénea y comparable, tomando en consideración aquella información relativa al municipio, distrito o Entidad Federativa de que



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

se trate, respecto de lo cual, debe construirse tomando en consideración a la totalidad de los conceptos reportados en el periodo sujeto a revisión.

En ese marco, la matriz de precios que se presenta resulta -ante la depuración excesiva, que conllevó a una eliminación injustificada de valores completos- ser una base de datos insuficiente para la valuación de los gastos no reportados principalmente, puesto que la exclusión de información afecta el cumplimiento de los criterios de determinación relacionados con la disposición geográfica y las condiciones de uso del tipo de bien o servicio en cuestión, además la eliminación no brinda certeza que se encuentran realmente los valores más altos reportados.

Cabe resaltar que la depuración es evidente en Entidades Federativas donde son muy pocos los conceptos de gastos listados en la matriz de precios, como ocurre en Baja California con 4 registros, o bien, Chiapas y Tabasco con sólo 8 conceptos de gastos cada una. Si bien podría considerarse que son suficientes sólo 4 conceptos de gastos por una Entidad Federativa y que representan los valores más altos reportados, contrastando la información contenida en la matriz de precios con la información almacenada en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), la anterior hipótesis no es aceptada.

Para ejemplificar mejor las ideas, resaltaré la situación en Baja California, de la revisión al SIF podemos encontrar que en el ID de Contabilidad 65697 del Partido de la Revolución Democrática se reportaron pinta de bardas, concepto que no se encuentra en la matriz de precios de la mencionada Entidad Federativa.

La limpieza desmesurada de los conceptos de gasto en la matriz de precios representa mayor relevancia cuando se actualiza el supuesto de egreso no reportado. Como ocurrió en el ejemplo de Baja California. Durante la revisión de Movimiento Ciudadano, ID 7, se acreditó que el sujeto obligado omitió reportar 17 bardas, por lo que la UTF para la determinación del costo tuvo que recurrir a datos de Jalisco.

Es importante destacar, que el RF prevé las ausencias de información dentro de la matriz de precios, estableciendo que, en caso de no existir información suficiente en la Entidad Federativa involucrada, se podrá considerar aquella información de Entidades Federativas que cuenten con un ingreso per cápita semejante, es decir, esta previsión constituye una excepción. Sin embargo, al descartar información de la matriz, como acontece en este caso, esta excepción se ha convertido en una práctica y opción recurrente de la UTF al momento de su construcción y determinación de costos. Lo anterior, a la postre impacta de manera negativa en la certeza de los resultados de la fiscalización de los sujetos obligados.

No obstante, para seguir con el ejemplo, Jalisco no tiene un ingreso per cápita semejante al de Baja California de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

de Geografía y Estadística, referente a Producto Interno Bruto a precios corrientes, correspondientes al 2019, así como los datos referentes a la población proyectada 2019 del Consejo Nacional de Población. Adicionalmente, el registro de pinta de bardas en el ID de Contabilidad 65697 es un valor más alto al valor de Jalisco utilizado por la UTF para la determinación de precios.

Lo verdaderamente apegado al RF es contar con todos los valores reportados por todos los sujetos obligados, de no hacerlo se pierde información relevante especialmente para la determinación de los egresos no reportados, puesto que la información completa, precisa y la calidad de datos son esenciales para dicha consideración.

En consecuencia, considero que, bajo esta lógica, la matriz de precios siempre estará incompleta y no constituye un documento que ofrezca los parámetros suficientes y razonables que den certeza en nuestro actuar institucional.

Por lo anterior, no puedo acompañar la metodología bajo la cual fue construida la matriz de precios, porque la depuración a la que fue expuesta rompe con la lógica misma de la referida matriz, como un instrumento con un efecto autorregulador de los propios actores políticos y de ser un mecanismo disuasivo para erradicar el egreso no reportado.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente **VOTO CONCURRENTE**.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

